CRITERIO PARA FORMULAR UNA NUEVA LEY MINERA

POR LEOPOLDO SALAZAR SALINAS

(Concluye)

De lo dicho se desprende claramente cuál es la diferencia que desde el punto de vista industrial y técnico existe entre cada una de las fases del desarrollo de la minería, deduciéndose de tales consideraciones que debe haber una concesión especial, con características peculiares para cada una de esas etapas, sin que en ninguno de los dos primeros casos, o sean el cateo y la exploración, tenga influencia determinante el capital invertido, pues el pretender llamar "minero en pequeño" al que invierte poco dinero, además de ser arbitrario, no es más que definir a un *pequeño capitalista*, y por lo tanto, la legislación que tal característica aceptara, no abordaría, ni mucho menos resolvería, la imperiosa necesidad de considerar la cuestión desde el punto de vista del trabajo: siempre seguiría siendo una legislación capitalista.

Pero la división que la técnica aconseja para definir las distintas etapas de la minería, y por consiguiente, las tres clases de concesiones que la legislación ha de reglamentar, tiene también un aspecto social de la mayor importancia que no debe relegarse a segundo término ni mucho menos dejarse de dilucidar.

El eslabonamiento que la técnica y las necesidades de la industria establecen en el orden teórico, y que es constantemente confirmado en el orden práctico, define, por poco que se reflexione en lo que llevo escrito, un sentimiento de perfecta solidaridad que, a manera de eje nervioso, se extiende desde las actividades del cateador hasta las del explotador; liga de solidaridad que realizará, por primera vez en México, el alto ideal de COOPERACION DE CLASES, cuyo buen entendimiento substituirá la tendencia de la LUCHA DE CLASES, que no siempre es rectamente interpretada, estableciendo una serie de responsabilidades que, sin necesidad de sanción penal alguna y sin que sea menester intervención fiscalizadora de ninguna autoridad, se realizará automáticamente, por la naturaleza misma de las cosas, estableciendo una ilación perfecta que hará que esta in-

industria tan importante y que todavía asume gran expectativa en México, a pesar del derrumbe de la plata, se desarrolle en la forma armónica que corresponde a una actividad en que todos los mexicanos estamos por igual interesados.

La apatía con que hasta la fecha se ha obrado en este sentido, es lo que hace que todavía resulte oportuna la reforma, pues aunque los criaderos exclusivamente argentíferos ya no fueran objeto de interés para el minero, si el metal que contienen siguiera su vertiginoso descenso, todavía quedan criaderos minerales de naturaleza metálica y muchos más aún de carácter no metálico, que el cateador puede encontrar y que quizá ha encontrado ya, aunque lo conserve en secreto, en las anfractuosidades de nuestras sierras, adonde todavía no llega el soplo vivificador de las comunicaciones.

Yo entiendo que el papel del cateador, tal como lo he definido, que es el que se desprende del carácter técnico e industrial de la minería, es el que verdaderamente establecerá la dignificación del obrero minero, pues todo lo demás que se haga, y que de hecho está haciéndose ya, en calidad de medidas de protección, de garantía y aun de ayuda al obrero de minas, no deja de considerarlo en su carácter de asalariado y aun en cierto modo dándole una apariencia de protegido o de menor de edad.

Claro que las medidas que tienden a garantizar la vida, la seguridad y la salud de los operarios en las minas, y que fueron implantadas en México, por primera vez, bajo la Presidencia del C. don Francisco I. Madero, significan un gran progreso en la vida del trabajador mexicano que se consagra al peligroso arte de las minas.

Esas medidas protectoras ya han ido siendo aceptadas aun por los elementos más reaccionarios de México, y existen muchas compañías mineras que las han implantado de buen grado, y a veces con toda perfección, existiendo, a mayor abundamiento, una buena organización de los servicios oficiales que tienden a vigilar el cumplimiento de los reglamentos de policía y seguridad en las minas.

Pero el reconocimiento del papel que el minero desempeña, no como asalariado, sino como iniciador y como factor indispensable en el desarrollo de una gran industria, es lo que verdaderamente ha de dignificar al obrero minero, poniéndolo, desde el punto de vista legal, que a su vez se basa en consideraciones indiscutibles de técnica minera, en condiciones de igualdad con el minero que explora y con las compañías mineras que explotan. *Saldrá, pues, el minero mexicano, obrero, mediante una legislación que se base en los preceptos apuntados, de la categoría de elemento débil, cuya explotación inicua evita el Gobierno con sus medidas protectoras, para elevarse al papel de elemento fundamental, y tan importante como puedan ser los otros dos, para el desarrollo de la industria.*

De los obreros mismos dependerá, entonces, el llenar su misión cumplidamente, ya sea multiplicando sus actividades y perfeccionando sus conocimientos, ya organizándose sobre la base de sociedades cooperativas para mejor cumplir con el papel que la técnica les señala en el funcionamiento armónico de la industria natural de México.

Las otras dos etapas por las que forzosamente atraviesa la industria minera, son la exploración y la explotación, y acerca de ambas creo que ya dije lo bastante para precisar su alcance y, sobre todo, para diferenciarlas de la etapa del cateo, con la que comúnmente se confunde la primera, o sea la exploración.

Debo, sin embargo, a este respecto, hacer una aclaración, porque ha acontecido que hasta un ingeniero de minas distinguido haya incurrido en lamentable equivocación acerca de la exploración, considerada como una fase de la industria.

En nuestro tecnicismo minero la palabra "exploración" tiene dos connotaciones del todo diferentes. La una se refiere a aquellos trabajos que se hacen en toda mina, y muy especialmente en aquellas que están en plena producción, con objeto de descubrir nuevas regiones mineralizadas que vengan a constituir reservas en la propiedad minera. Esta clase de exploración es la que los ingleses llaman "development" y que nosotros mismos solemos llamar trabajos de desarrollo, término bastante adecuado, puesto que el objeto de esos trabajos es el de desarrollar una propiedad, ampliar el campo de acción de una empresa minera, prever un desarrollo futuro, etc., etc., así que todos esos trabajos de cuele de tiros, de apertura de nuevos socavones, de trazo de cruceros, de frentes a rumbo de veta y algunos otros, entran en la fase de explotación, puesto que se ejecutan en una mina que está o ha estado ya produciendo metales, y que solamente tienen por objeto acabar de reconocer el fundo minero.

Muy otra es la índole de la exploración, en el sentido en que la he tomado, pues aquí el objeto del trabajo consiste en cerciorarse si un yacimiento minero, el primero que se reconoce dentro de un fundo, puede ser o no costeable, en cuyo sentido parece que la distinción es muy clara, pues no se trata de un trabajo anexo a la explotación y, en cierto modo, consecuencia de ella, sino de una labor preliminar y del todo independiente de la explotación, ya que puede conducir a ella, en caso de ser los resultados de la exploración satisfactorios, o bien, puede determinar el abandono del fundo, si los resultados fueran negativos.

La diferencia entre exploración y explotación no creo que necesite mayores explicaciones para precisarla, pues es bastante clara y entiendo que la piedra de toque que he elegido, y que es: el entrar el minero en el período de producción de metales, mediante operaciones me-

talúrgicas, define, sin lugar a duda, el paso de una etapa a la otra, pudiéndose tan sólo hacer extensivo el caso a todos aquellos negocios en que, sin tener la instalación metalúrgica para producir directamente metales, se tenga, sin embargo, para obtener una fase intermedia entre el mineral en bruto y el metal que contiene, o sea la concentración. En tal concepto, se consideraría un negocio como habiendo entrado a la fase de la explotación tan luego como usara maquinaria que tuviera por objeto realizar una operación metalúrgica para concentrar el metal, cuya obtención se persigue en un negocio minero, o para obtener de plano ese metal.

* * *

Definidas ya las distintas etapas por las que, técnica e industrialmente, tiene que pasar la industria minera, y el carácter de las concesiones derivadas de ellas, veamos en qué forma la Nación, que es la propietaria del subsuelo y de todos sus dones, puede conceder éstos a los particulares, añadiendo tan sólo, para terminar con la parte anterior, aunque parece que no sería necesario hacerlo, que no porque defino las tres etapas a que me he venido refiriendo, considero que la industria debe forzosa y necesariamente pasar por ellas en un período de tiempo determinado, pues es claro que si un criadero mineral ofrece características suficientemente claras, precisas y terminantes, en concepto del que pretenda que le sea concedido, no será necesario que empiece el trabajo por el cateo, pudiendo iniciarse el trabajo, desde luego, en la fase de la exploración o aun en la de la explotación. Todo esto queda a juicio del mismo interesado.

Lo que toca a la Nación es definir y precisar en qué forma otorgará sus concesiones y cuáles serán los deberes y los derechos que, mediante tales concesiones, correspondan a los particulares.

Dichos pormenores también deben estar sujetos a la técnica y derivarse directamente de la naturaleza de las etapas que constituyen el desarrollo integral de la industria minera.

En muchos países, entre ellos los Estados Unidos del Norte, sólo tienen derecho a obtener una concesión minera los ciudadanos del propio país; pero en México, sea por el espíritu eminentemente liberal de nuestras leyes, sea porque el concepto capitalista ha arraigado entre nosotros con toda la fuerza de una convicción y hasta con los caracteres de un fetichismo, todos los hombres tienen derecho a disfrutar de nuestras riquezas, imponiéndoseles tan sólo, a los que no son hijos del país, la formulación de una protesta cuyo alcance me abstengo de calificar, ya que en otras ocasiones lo he hecho y quizá vuelva a hacerlo en oportunidad propicia.

Por el momento, el hecho es indiscutible y esto corrobora, entre

otras cosas, lo que asenté al empezar este discurso: que la industria minera en México no es mexicana.

Concretándome, por lo tanto, a la parte puramente técnica de la explotación minera, independientemente de las personas a quienes las concesiones se otorguen, encuentro desde luego que, dado el carácter distintivo de las tres etapas: cateo, exploración y explotación, hay que buscar qué características se derivan, para el fin de la concesión, de cada una de esas etapas.

Desde luego salta a la vista que, tanto el cateador como el explorador, no necesitan, para realizar su objeto, sino de un período de tiempo limitado, el que baste para cerciorarse, el primero, de la continuidad del criadero y de sus expectativas, que en su propio interés está el hacerlo en el menor tiempo posible, y el que necesite el segundo para confirmar las esperanzas del primero y hacer entrar su mina a la etapa de explotación o decidir su abandono, estando éste animado, sin duda, por el grande interés de entrar cuanto antes a asumir el carácter de explotador, ya sea por sí o por intermedio de alguna empresa que él mismo organice, pues será hasta entonces cuando la Nación pueda reconocerle el derecho de transformar el llenamiento de las vetas en metales preciosos o industriales.

En ambos casos es evidente que la finalidad de la concesión ha de realizarse a plazo definido.

El explotador se encuentra en distintas condiciones, pues la naturaleza de su labor no le permite, en la mayor parte de los casos, fijar un plazo para realizar el completo disfrute de los criaderos minerales contenidos en su fundo, y aunque dado el carácter intensivo que actualmente tiene la explotación minera, la vida de una mina no puede prolongarse demasiado, a la Nación interesa el dar al concesionario toda la amplitud necesaria para que pueda garantizarse de la inversión de capital, que en esta clase de negocios siempre es cuantiosa.

En resumen, las concesiones de cateo y de exploración deben ser por tiempo limitado, y las de explotación, por tiempo indefinido.

La fijación de estos límites para las dos primeras clases de concesiones es cosa de secundaria importancia y que puede hacerse teniendo a la vista las condiciones generales bajo las cuales esta clase de negocios se desarrollan, por lo común, en México.

En mi concepto, y por el conocimiento personal que tengo de esta clase de trabajos, por haberlos ejecutado yo mismo en distintas ocasiones y en diferentes lugares de la República, creo que para la concesión de cateo bastaría el término de un año, y para la de exploración, el de cinco años.

Consideraciones semejantes pueden aducirse para limitar también

la extensión, en superficie, de las concesiones, y hasta con mayor acopio de razón, pues a la Nación no le convendría, en manera alguna, que un cateador o un explorador acapararan extensiones considerables, substrayéndolas, por un tiempo más o menos largo, a una posible explotación y distraendo así su atención y sus elementos, en lugar de concentrar ambas cosas en una superficie limitada.

En mi concepto, una extensión de 9 hectáreas para las concesiones de cateo y de 20 hectáreas para las de exploración, sería más que suficiente, sin perjuicio de reconocer a la Nación el derecho de otorgar prórrogas, en ciertos casos perfectamente justificadas.

La concesión de explotación, por razones análogas a las ya mencionadas, al tratar de su duración, debe ser también ilimitada en cuanto a su extensión, así como las obligaciones que con la Nación contraiga el concesionario, deben ser las máximas que dentro del espíritu liberal de nuestras leyes y en vista de los grandes intereses de la Nación, pueden imponerse.

Se complementaría el concepto para cada una de estas concesiones, reconociendo al cateador el derecho preferente para transformarse en explorador o en explotador, e igualmente al explorador para transformarse en explotador. Más aún, yo sostengo la conveniencia de dejar una puerta abierta al explotador para volver a la etapa de la exploración, si por cálculos deficientes, por mala observación o por condiciones económicas difíciles de prever, no pudiera, en un momento dado, seguir asumiendo las obligaciones que la concesión de explotación le impongan y que deben ser, como ya lo dije y como es lógico, proporcionadas a la importancia de la concesión.

Hay múltiples razones que aducir en apoyo del punto de vista que tomo para fijar el criterio fundamental para una nueva legislación minera en México; pero no queriendo alargar demasiado este escrito, me abstengo por el momento de consignarlas, esperando que lo que llevo dicho baste para prevenir objeciones de índole fundamental.

Para mí, dada la importancia del movimiento social en que nos ha tocado ser actores, todas estas leyes deben considerarse, no simplemente como disposiciones encaminadas a encarrilar la marcha de la industria, sino como complementarias de las leyes básicas que la humanidad ha ido adoptando gradualmente en los últimos años y que en México se han manifestado en la Carta Fundameatal promulgada en Querétaro en 1917, y más que en nada, en los bien entendidos ideales que nuestros gobernantes han proclamado.

Además, todas estas leyes están llamadas a constituir un cuerpo de doctrina que complete la obra revolucionaria que en nuestro país se ha estado desarrollando en los últimos años y cuyo empuje conviene encauzar, no para oponerse a su marcha victoriosa, sino para

señalarle los senderos que mejor convienen a su más íntegra y feliz realización.

Desde tal punto de vista, estimo que la idea primordial que vengo sosteniendo de dar al cateador o gambusino un papel en el desarrollo de la industria, no solamente se ajusta a los preceptos de la técnica y obedece a los intereses de la industria, sino que *implica la realización de un fin social de la más alta trascendencia*, desde el momento en que no se basa la ayuda al obrero minero, como suele decirse, en una consideración protectora o piadosa, sino que, al reconocerle el papel que le corresponde en el mecanismo industrial, papel del que las legislaciones anteriores le han despojado, no se le hace aparecer como un elemento de extorsión o de hostilidad hacia el capital, sino que se le presenta en el campo noble de la cooperación y en el ejercicio de una labor que, por su independencia y por sus altas finalidades, lejos de acarrearle rencores y malas voluntades, le llevará siempre prestigios y respeto.

Para que el cateador o gambusino pueda llenar cumplidamente estos altos fines, es indispensable, dada la corrupción de nuestras costumbres, que la ley procure que su ingerencia en el mecanismo industrial sea sobre la base de la más absoluta buena fe.

El cateador es, por lo general, hombre ignorante, sencillo y casi siempre propenso a la credulidad, y por eso han abundado los casos en que, al poner sus descubrimientos en manos de funcionarios, de comerciantes, de hacendados o de mineros ricos, muchas veces ha sido burlado, aprovechándose de sus descubrimientos esas personas y sin quedarle a él más que el resquemor por el engaño sufrido y por la decepción, que le hace ocultar sus nuevos hallazgos, en perjuicio del desarrollo de la industria.

Por lo tanto, debe estudiarse la manera—y así lo estudió la comisión que formuló el proyecto de 1929—de que las solicitudes que se presenten para obtener concesiones de cateo, queden, en lo posible, garantizadas contra la rapacidad de empleados y agentes subalternos, y que la tramitación sea expedita y libre de todo costo, quedando, tanto el concesionario de cateo como el de exploración y el de explotación, en la más absoluta libertad para disfrutar, desde que inicien sus trabajos, de los productos de ellos.

Para acabar de precisar la trascendencia que en el orden social tendría esta clase de concesiones, me bastará insistir en recordar que la explotación intensiva de las minas está dando por resultado que las más antiguas, muchas de las cuales empezaron a producir desde los primeros años del siglo XIX, se vayan agotando gradualmente. Ya se ha visto realizado este suceso en los Minerales de El Oro y Tlalpujahua, entre otros, y pronto seguirán los demás Reales de mi-

nas, significando esto la ruina completa de esos centros industriales, pues es bien sabido que al amparo de la minería es como hasta hoy en México se han desarrollado todas las demás industrias, y que cuando la minería decae, siguen igual suerte la agricultura, el comercio y todas las industrias en general, implantadas al amparo de la primera. Bastaría una rápida visita a los Minerales antes citados para que, comparando con lo que fueron en tiempos no muy remotos, se percibiera el efecto del agotamiento de las minas.

Si la labor del cateador minero se hubiera estimulado desde tiempos pasados, es muy probable que en los momentos de presenciar la suspensión de trabajos en las minas antiguas, hubiera ya trabajos preparados en regiones nuevas, en donde pudieran implantarse concesiones de explotación que substituyeran a las explotaciones que se han ido agotando. Como no ha sido así, resulta ahora una situación verdaderamente angustiosa para la minería nacional y que elocuentemente demuestra lo que significa la imprevisión que las leyes anteriores han tenido a este respecto.

Ya que he tocado el punto de la suspensión de los trabajos en las minas, no estará por demás decir unas cuantas palabras acerca de los paros.

Hasta la fecha, según las noticias que tengo, las compañías mineras han solicitado los paros por diversos motivos; y no han sido raros los casos en que, al alegar la incosteabilidad de la explotación, los mineros locales han protestado, estimando, con razón o sin ella, que no ha llegado el momento en que los criaderos sean incosteables.

Los que conocemos el mecanismo del trabajo minero y las dificultades con que aun las grandes empresas suelen tropezar para llevar a cabo su labor, comprendemos bien que estos paros pueden ser bastante justificados en ciertos casos, aun cuando el criadero, en su parte costearable, no esté agotado; pero como esas dificultades raras veces son invencibles, nunca deben conceptuarse como permanentes, y por lo tanto, los paros que en esas condiciones se autoricen, deberían siempre ser por término definido, y si en verdad un criadero está agotado, o lo reputa así la empresa que lo ha venido explotando, tal circunstancia debería ser una razón poderosa para que se declarara la caducidad de la concesión, pues aparece incongruente e ilógico que cuando un propietario de una concesión reconoce que no puede trabajar por haberse agotado el mineral, por ser incosteable, conserve la concesión de una cosa que ya no tiene utilidad para él, tanto más cuanto que pudiera suceder que en otras manos más hábiles o más afortunadas, el negocio pudiera todavía dar algo de sí.

Entiendo que con lo que hasta aquí llevo escrito, he tocado la parte fundamental del asunto que ha motivado mi estudio. Los demás

pormenores, que es común consignar en las leyes de minería, son cosas de segunda importancia; así es que voy a dar fin a mi trabajo consignando en qué forma las últimas legislaciones que hemos tenido y dos proyectos formulados, han definido su objeto esencial, constituyendo el artículo 1° de sus ordenamientos, y consignaré, por último, la forma en que esa definición ha sido dada por la comisión de que formé parte, absteniéndome de todo comentario, pues estoy seguro de que la simple lectura de la redacción que en las distintas épocas se ha dado al artículo 1° de la ley, bastará para que las personas cultas se den perfecta cuenta de la índole de las reformas que se propuso implantar la comisión y que fueron aprobadas por el Secretario de Industria, a quien ese dictamen fue presentado.

La Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1909, tiene su artículo 1° en la forma siguiente:

Art. 1° Son bienes del dominio directo de la Nación y están sujetos a las disposiciones de esta Ley:

I. Los criaderos de todas las substancias inorgánicas que en vetas, en mantos o en masas de cualquier forma, constituyen depósitos cuya composición sea distinta de la de las rocas del terreno, como los de oro, platino, plata, cobre, hierro, cobalto, níquel, manganeso, plomo, mercurio, estaño, cromo, antimonio, zinc y bismuto; los de azufre, arsénico y teluro; los de sal gema y los de piedras preciosas.

II. Los placeres de oro y de platino.

El Departamento de Minas sometió al 1er. Congreso Nacional de Industriales, reunido en México en 1917, la redacción siguiente:

Art. 1° Son bienes del dominio directo de la Nación y están sujetos a las disposiciones de esta Ley:

a) Los criaderos o yacimientos de substancias inorgánicas, en cualquier forma que se presenten:

I. De substancias metálicas, como, por ejemplo: los de oro, platino, estaño, antimonio, arsénico, iridio, molibdeno y tungsteno; los de plata, mercurio, plomo, cobre, bismuto, cadmio y radio; los de zinc, manganeso, níquel, cobalto, fierro, uranio y vanadio, y los de aluminio, cromo, zirconio y titanio, y

II. De substancias no metálicas, como, por ejemplo:

a) Los de piedras preciosas, como: ametista, berilo, diamante, esmeralda, granate, ópalo, rubí, topacio, turmalina y zafiro.

b) Los de carbono, como: grafito, antracita, hulla, lignito y turba.

c) Los de azufre, selenio y teluro.

d) Los de fosfatos y sustancias minerales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, salvo las comprendidas en la fracción II del artículo 2°.

e) Los de sales alcalino y alcalino-terrosas, como: la sal gema, sal común en depósitos naturales, alunita, kainita, magnesita, glauberita y colemanita.

f) Los de materiales abrasivos: fluorita, criolita y barita; pinturas minerales; asbesto, feldespato, cuarzo, tierras de Batán, mica, monazita y talco.

g) Las aguas procedentes del desagüe de las minas.

La comisión que en el 1er. Congreso Nacional de Industriales dictaminó sobre el particular, redactó el artículo como sigue:

Art. 1° Son del dominio directo de la Nación y están sujetos a las disposiciones de esta Ley:

Todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de la de los componentes del terreno, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos mineros, y todos los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, como, por ejemplo:

I. Metálicas:

Oro, platino, estaño, antimonio, arsénico, iridio, molibdeno y tungsteno; plata, mercurio, plomo, cobre, bismuto, cadmio y radio; zinc, manganeso, níquel, cobalto, fierro, uranio y vanadio; aluminio, cromo y titanio.

II. No metálicas:

a) Las piedras preciosas, como: ametista, berilo, diamante, esmeralda, granate, rubí, topacio, turmalina y zafiro.

b) Azufre, selenio y telurio.

c) Los fosfatos y otras sustancias minerales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, salvo las comprendidas en la fracción II del artículo 2°.

d) Las sales alcalino y alcalino-terrosas, como: la sal gema, sal común en depósitos naturales, alunita, kainita, magnesita, glauberita, colemanita y ulexita.

e) Materiales abrasivos, fluorita, criolita, barita; pinturas minera-

les; asbesto. feldespató, cuarzo, tierras de Batán, mica, monazita y talco.

III. Las aguas procedentes del desagüe de las minas.

La Ley de industrias minerales vigente lo consigna en la siguiente forma:

Art. 1º Son bienes del dominio directo de la Nación y están sujetos a las disposiciones de esta Ley:

I. Los criaderos de todas las substancias inorgánicas que en vetas, en mantos o en masas de cualquier forma, constituyan depósitos cuya composición sea distinta de la de las rocas del terreno, como los de oro, platino, plata, cobre, hierro, cobalto, níquel, manganeso, plomo, mercurio, estaño, cromo, antimonio, zinc y bismuto; los de azufre, arsénico y telurio; los de sal gema y los de piedras preciosas.

II. Los placeres de oro y de platino.

En el proyecto de 1929 ese artículo dice, sencillamente:

Art. 1º "Son objeto de las concesiones a que esta ley se refiere, todas aquellas substancias minerales cuyo dominio directo, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Nación, excepto el petróleo, que se rige por una ley especial y sus reglamentos respectivos."

NOTA FINAL.—A consecuencia de mi ausencia del país y de las múltiples ocupaciones que a mi regreso han absorbido mi tiempo, he dejado en suspenso no sólo la publicación del estudio anterior, cuya elaboración data de hace más de un año, pues que fue leído ante la Sociedad de Geografía y Estadística el 24 de junio de 1930, sino el análisis de la ley minera vigente, que en muchos puntos coincide con el proyecto formulado en 1929.

Descargado un tanto de las apremiantes necesidades que me incumbe llenar, reanudo, con la publicación de mi estudio, mis actividades en este ramo de la legislación minera, y espero publicar próximamente una serie de artículos, analizando los preceptos vigentes en la materia.

Agosto de 1931.